

La sociología política: una experiencia desde la academia

**Lección inaugural de la VII Promoción de la Maestría en Sociología
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle Abril, 2003**

Francisco Leal Buitrago¹

La generación de académicos a la que pertenezco surgió en la época en que se publicó *La Violencia en Colombia*, el primer tomo en 1962 y el segundo en 1964. Este libro lo escribieron quienes fueron nuestros maestros en una disciplina recién nacida en el país, y por supuesto considerada exótica. La sociología hacía parte del grupo de profesiones emergentes en las ciencias sociales, cuya punta de lanza fue la economía, fundada un poco más de una década atrás. Fue el aporte de la educación superior a las exigencias de una nueva racionalidad, correspondiente a la etapa más agitada de la modernización capitalista en el país, caracterizada por sus desequilibrios y su veloz carrera contra el tiempo, como si quisiera subsanar el retardo de su aparición frente a lo acaecido en países semejantes de la región. Sin directriz alguna, la rápida y dispersa urbanización, la acumulación sostenida y concentrada de capital, y el inicio de una gran diversificación social, en un contexto geográfico y cultural con acentuada regionalización, fueron fenómenos que marcaron los distintos objetos de estudio de las ciencias sociales y el ejercicio de sus profesiones.

El trasfondo de esta barahúnda fue la guerra civil no declarada entre liberales y conservadores, conocida como «la Violencia», expresión de un Estado raquíutico y premoderno, que disimulaba su debilidad escudándose detrás del sectarismo de un bipartidismo que penetraba toda la sociedad y de una Iglesia recalcitrante y atrasada. Fiel a la nueva racionalidad, que no le incumbía mostrar preferencias por ninguna de las partes en pugna, el libro sobre «la Violencia» despertó ruidosas críticas en la opinión pública, sobre todo entre quienes se sintieron impugnados por haber sido instigadores de la contienda. De esta manera, comenzaron en el país los análisis profesionales en el campo del conflicto armado, tarea que desde ese entonces se ha mantenido, frente a la resistencia a desaparecer de ese problema. Esto ocurría en los años finales de una etapa en la que el bipartidismo cubría todo el espectro de lo que se creía era el campo de la política, incluidas sus prácticas violentas, y en vísperas del inicio de otra época en la que los actores de esas prácticas se multiplicaron. Con cambios sustantivos que definieron una nueva situación, esta época prosigue tercamente su camino, seguida de una larga, persistente y complicada marcha de depredación.

¹ Profesor titular de la Universidad de los Andes y profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia. Esta lección fue impartida en el Banco de la República (Cali) el 25 de abril de 2003.

La visión pionera de la sociología hacia el conflicto armado abrió este campo a otras disciplinas, en especial a la antropología, la psicología, la ciencia política, la economía y el derecho, la mayor parte de ellas reconocidas de tiempo atrás en espacios profesionales definidos. A medida que los efectos de la así llamada *violencia* penetraron de variadas maneras y en forma pausada y firme en la vida cotidiana de colombianos y colombianas, el conocimiento de las ciencias sociales se enriqueció con un sinnúmero de preguntas y respuestas sobre las motivaciones y la dinámica que animaban la injerencia de la violencia en muchas de las prácticas políticas. Las posturas críticas de estas ciencias en el ambiente polarizado de la Guerra Fría, se desarrollaron en medio del carácter limitado y maniqueo del régimen político del Frente Nacional, fórmula con la que las élites pretendieron encontrar la solución a su incapacidad de administrar la arrolladora modernización capitalista, mediante la búsqueda de integración de unos intereses de la sociedad cada vez más variados y dispersos.

Con la puesta en marcha de este modelo político elitista que suponía una plena inclusión social, la burocratización y el clientelismo sustituyeron al sectarismo como estímulos de reproducción del bipartidismo. Se expandieron así el aparato del Estado y sus recursos económicos, como soportes políticos y de integración frente a la diversificación de intereses y al aumento de los conflictos sociales. El Frente Nacional supuso, además, que al suprimir los mecanismos de oposición democrática se limaban las asperezas políticas del bipartidismo y disminuían los conflictos. Pero la diversificación social creció por fuera de los intereses de un establecimiento limitado en su cobertura a partir de la desideologización de los dos partidos, creando sus propios medios de protesta y de oposición. La inestabilidad social desbordó entonces el control de las profusas pero dispersas normas legales, a medida que su aplicación equiparó las protestas sociales con la subversión nacida de los rezagos de «la Violencia», los estímulos de la Guerra Fría y la ausencia de espacios de oposición democrática. La prolongada estabilidad macroeconómica y de las instituciones políticas liberales sirvió de amortiguador social, e hizo pensar que la ebullición de la sociedad era controlable mediante la continuidad institucional y la improvisada pero persistente represión oficial. Este entorno nacional e internacional estimuló el énfasis que la política -en especial sus manifestaciones violentas- adquirió en los análisis de los fenómenos sociales, a pesar de que los grupos dirigentes, movidos por su arrogancia provinciana, los ignoraba y desdeñaba. En este espacio de entusiasmo de unos y desconfianza de otros, se concretó mi inclinación por el estudio de las contradictorias expresiones de la política, gusto que siempre ha acompañado mis quehaceres en la academia.

Inducido por una enriquecedora experiencia militar previa, comencé por tratar de entender desde un punto de vista analítico al estamento castrense del país. Me interesó mirar su tardía profesionalización frente a sus congéneres de la región latinoamericana y su desconfiada y ambivalente inmersión en la guerra que libraron liberales y conservadores. Era un campo casi virgen en un país en el que, a diferencia

de la mayoría de los de la región latinoamericana, el sector castrense no fue gobierno sino por excepción. Bajo el impulso de facciones arrinconadas por el sectarismo derivado de un bipartidismo premoderno que disimulaba la fragilidad estatal, el experimento de pacificación del gobierno militar fue un fiasco más en la cadena de cuatrienios que alimentaron la violencia. Me resultó fácil en ese entonces avanzar en las indagaciones sobre estas materias, pues cualquier afirmación sensata era vista como novedad. Pero mis tímidos ensayos, apoyados más que todo en dispersas fuentes primarias, no fueron del agrado de una institución reacia a la autocrítica y acostumbrada a recibir las loas de quienes movidos por intereses privados alimentan su convencimiento de haber sido la forjadora de la nacionalidad.

Pese a que el conflicto armado estaba bien lejos de adquirir las dimensiones que hoy presenta, la ideología de la Guerra Fría y su expresión suramericana, la Doctrina de Seguridad Nacional, se encargaron de mantener la ambigüedad en la identificación del que llamaron «el enemigo interno», supuesta materialización doméstica del comunismo. En ese entorno, el relativo peligro que despertaban las posturas críticas de la academia provenía más del Estado que de la emergente subversión, no obstante que los gobiernos y sus numerosos áulicos definían al país como la democracia más antigua y estable de América Latina.

Mi incursión posterior en temas tales como el régimen político, sus instituciones estatales y el bipartidismo nacional, me enseñaron que la nueva violencia, aquella identificada como subversiva, tenía su entronque en las acciones y omisiones de quienes habían orientado -o desorientado- los gobiernos en el país. Y, naturalmente, esa práctica violenta contra el sistema imperante, contraria a la que define la política, la alimentaban las ideologías polarizantes de ese «equilibrio del terror» en que se hallaba el mundo. También aprendí que, en el espacio de las omisiones, la represión militar y policial buscaba a tientas -o mejor, con la luz negra del maniqueísmo bipolar de la Guerra Fría- llenar un vacío político producido por la ausencia de responsabilidad de las autoridades civiles en el manejo de los problemas de desorden público. De esta manera, me di cuenta de que la violencia política era una sola, con múltiples cabezas muy difíciles de identificar como ligadas al mismo cuerpo arrasador. Con consecuencias ambivalentes, el desprecio consentido de la dirigencia política del país hacia las ciencias sociales, y la consecuente ignorancia de sus investigaciones, hicieron que los analistas no fueran percibidos como un peligro, con excepciones notables en momentos y casos especiales. Esta situación fue matizada por unos pocos afanes oficiales de hace 20 años, que buscaron una paz idealizada llena de palomas y símbolos sin mayor claridad política, afanes malogrados por el grueso de beneficiarios que tenía el barullo de la violencia. En alguna medida, esta visión romántica de la paz extendió por un tiempo su manto protector sobre la investigación social. Pero, a la vez, aumentó las dificultades de alcanzarla, debido a que sacaron ventaja de ello quienes por diversas razones no les convenía la paz: curiosamente, más sectores oficiales armados y desarmados, y grupos privados dispuestos a sustituir funciones exclusivas del Estado, que la misma subversión.

Sobrevinieron así cambios progresivos en el conflicto armado colombiano. Cambios que, al final de su amplio y veloz recorrido arrasador, tienden a englobar con diferentes combinaciones buena parte de las formas de confrontación experimentadas en el mundo durante el período transcurrido luego de la Guerra Fría. Las muy variadas formas que se vieron en la antigua Yugoslavia, son un buen ejemplo para contrastar con lo que se observa en el país. Esta clase de confrontaciones emergentes han recibido el calificativo de *nuevas guerras*, y en Colombia conforman un paradigma bélico novedoso, digno de las inquietudes más lúcidas de los investigadores de estos fenómenos. En escasos dos o tres lustros se incubó una guerra en el país, en la que, rodeado de un entorno geográfico y político favorable, y con la plena complacencia del establecimiento, el narcotráfico proyectó, con toda la fuerza incubada en su codicia, nuevos y viejos problemas sociales. Se fundieron así la debilidad del Estado y la correlativa impunidad, la corrupción estimulada por el crecimiento del aparato estatal y el gasto público, la acumulación capitalista desregulada y naturalmente la violencia; ésta se expandió y diversificó. En ella emergió desafiante el paramilitarismo, alentado por antiguas normas oficiales y por la visión maniquea de organismos armados del Estado, que consideraron que cualquier alianza contra el enemigo proporcionaba bondad a sus acciones

Al comenzar los años noventa, el intento de solución, mediante cambios profundos en las normas constitucionales, a las agresivas pretensiones de imponer otras formas de organización social, fue desbordado por la resistencia abierta de antiguos intereses. No se logró construir un sistema político diferente de ejercicio del poder. No valió el nuevo régimen político creado por una Carta profusa que exhibe anhelos democráticos y reconoce un país diferente al que sirvió de base para la gestación de la confrontación armada. Por esta razón de peso, entre algunas otras, luego de una abrupta y por ello traumática apertura económica hacia el exterior y del fracaso de un nuevo proceso de paz, muchos de los males que padecemos pasaron a ser vistos como causados por las deficiencias e insuficiencias de la Constitución de 1991. No se observa en ningún momento que la responsabilidad la asuman, así sea en pequeñas dosis, quienes aplican y desarrollan a su manera las normas que les conviene, y desconocen las que atentan contra sus privilegios. En esta circunstancia, no ha perdido vigencia el antiguo adagio colonial, adaptado claro está a las conveniencias del presente, de que la ley se obedece pero no se cumple.

Esas resistencias a la autocrítica han estado salpicadas de nuevos problemas que sirvieron para mostrar realidades disimuladas por largo tiempo por los administradores y los usufructuarios del poder. Como consecuencia de la emergente diplomacia coercitiva de Estados Unidos, se desnudó la complacencia de las clases dirigentes con la penetración del narcotráfico en la sociedad, mediante el escándalo derivado de la financiación de la campaña presidencial de 1994, por parte de la inmensa capacidad corruptora de las drogas. Luego de grandes costos para el país,

causados por el abandono oficial en ese momento del cuidado político que ameritaba el conflicto armado interno, la sociedad experimentó el final de la bien prolongada y notable estabilidad macroeconómica, seguido de la definición clara de ese conflicto como una guerra interna. Quedó al descubierto también que las violencias habían dejado de ser funcionales para numerosos intereses dominantes. En esas circunstancias, la dirigencia del país, inmersa en una sociedad diversificada, atomizada y carente de organizaciones políticas con suficiente legitimidad, amedrentada por el terrorismo y con escaso liderazgo, inhibido además por la violencia y la inestabilidad social, claudicó ante el modelo de intervención del Plan Colombia, orientado por la política hemisférica de Estados Unidos.

Los protagonistas más visibles de esta nueva guerra adquirieron autonomía financiera al privilegiar, en desmedro de la política, prácticas bandoleriles y la alianza con el narcotráfico, a costa de las necesidades de un campesinado excluido de los beneficios de la modernización, aspectos que le proporcionan buena parte de su novedad. Esta guerra es hoy fuente del debate académico acerca de si es o no civil. Es una guerra que aumenta con premura la cifra de muertos, desplazados y afectados. Y es una guerra que se alimenta sobre todo de la diversidad de las violencias políticas. De aquellas que se observan sin tapujo alguno: la de las guerrillas, la de los paramilitares y la que administra con un reciente afán de legitimación la Fuerza Pública. Pero son mucho más profundas y estimulantes para la reproducción de estas violencias sin tapujos, por una parte, la que se moldea día a día, de manera persistente en las disímiles regiones del país, por acción de quienes practican la política con el objeto de esquilmar al Estado. Y, por otra parte, la violencia que se construye a partir del crecimiento de la exclusión social, mediante prácticas de enriquecimiento fácil, pérdida del valor del trabajo y resistencia a redistribuir la depredadora concentración de riquezas y poderes. Mientras estas dos últimas fuentes de violencia no sean controladas a través de un ejercicio ciudadano activo de la política, resultante de un Estado con legitimidad creciente, aquellas -las que son visibles- no desaparecerán del todo, ni con las armas ni con la política.

En medio del lapso en que se dio esa profunda transformación en el conflicto armado, regresé a investigar lo que ocurría con los militares y en especial con el tema de la seguridad, que iniciaba entonces su notoriedad pública. Los militares experimentaban también cambios muy diversos, al ritmo de los que acontecían en la sociedad. Pero eran más que todo adaptaciones que iban a la zaga de los acontecimientos sociales, sin previsión alguna, al igual que lo que sucedía en las demás instituciones del Estado, es decir, a través de la improvisación. Pero la improvisación castrense cambió a medida que las instituciones militares adoptaron patrones impuestos desde fuera, desde la Estrella Polar, aquella que no nos abandona desde los tiempos de don Marco Fidel Suárez, pero que en los últimos años aumentó de magnitud. Esos patrones no hicieron más que llenar el vacío dejado por la ausencia de responsabilidad política de la dirigencia nacional en materia de orientación castrense.

La Fuerza Pública se recuperó así de su incapacidad operativa, aunque con graves distorsiones provenientes de las prioridades asignadas por la obsesiva política represiva de Estados Unidos contra las drogas. Además de que se impusieron intereses ajenos que corresponden poco a las capacidades y necesidades nacionales, los cambios inducidos en el brazo armado del Estado ocultan la rígida mentalidad moldeada durante su larga exposición a la ideología maniquea de la Guerra Fría, que ya da señales de superación en otras latitudes. Y esta manera de ver la patria desvirtúa buena parte lo que es rescatable de los cambios ocurridos.

El reinicio de un proceso de paz con la subversión en el gobierno pasado subsistió por tres años, pese a los tremendos errores oficiales en su manejo político y al consecuente fortalecimiento guerrillero. Pero los desmanes de la subversión, y la diplomacia desplegada por el gobierno para hacerlos evidentes en el exterior, se encargaron de degradar, dentro y fuera del país, la mítica imagen política del rebelde. Por su parte, la escasa actividad de la Fuerza Pública frente al paramilitarismo, impidió debilitar a este supuesto aliado del Estado. Al final, y con retardo debido a la creencia de que la insistente búsqueda de una paz abstracta conllevaba beneficios, los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ayudaron a definir la ruptura del mal llamado *proceso de paz*. Además, esos sucesos también influyeron en el resquebrajamiento de la unidad paramilitar alcanzada un lustro antes. El consecuente calificativo de *terroristas* y luego de *narcotraficantes* otorgado a las Autodefensas Unidas de Colombia por parte del país del norte, sacó a flote las profundas diferencias de sus expresiones regionales, unificadas en gran parte por la creencia de que esa potencia las consideraba sus aliadas, debido a la cruzada antisubversiva que emprendieron, sin que importaran sus atrocidades.

El manto romántico de la paz, que cubrió en su momento a la mayoría de investigadores que incursionaron en el campo de la política, en particular en el de la llamada de manera reiterada *violencia*, fue consumido por el fuego de la guerra. Investigadores que habían abogado por la paz, varios de ellos en su papel de funcionarios oficiales de paso por el Estado, fueron amenazados e incluso asesinados por desoír las voces implacables de una fuerza bruta cada vez más liberada de las mediaciones políticas. El Estado disminuyó entonces de manera relativa su potencial de ser una amenaza a las actividades de investigación social. En su lugar se plantaron, primero, los paramilitares, y luego la guerrilla. El importante trabajo de campo en la sociología se tornó de esta manera más peligroso. Por diversas circunstancias, académicos y pensadores ubicados en la ciudad de Bogotá nos encontramos en mejores condiciones relativas en ese aspecto. Y los que trajinan en la llamada -algunas veces de manera despectiva- *provincia*, están más expuestos a los avatares que pueden presentarse por razón de sus ideas o por la natural inclinación a indagar más allá de los muros institucionales. Lo que por esta vía llena de obstáculos se produce y publica, como resultado de actividades académicas y de investigación, es digno de encomio aún al margen de insuficiencias propias de las condiciones adversas.

La expansión del conflicto armado ha diseminado los blancos potenciales de quienes usan la fuerza para sus propósitos políticos. Sobre todo los ha esparcido con cierta preferencia y de manera poco discriminada en la dispersa población civil. Los blancos civiles indiscriminados de los llamados con eufemismo *actores armados del conflicto*, ya no son meros accidentes o casos fortuitos, pues hacen parte de la nueva racionalidad del enredado paradigma nacional de la guerra. No es que esos actores se hayan olvidado de los blancos específicos, sino que ya no son exclusivos, como lo eran antes. Los llamados daños colaterales del conflicto han perdido su capacidad de generar arrepentimiento en quienes los provocan. Prima la fuerza en acciones supuestamente políticas -que de por sí tienen efectos políticos inmediatos-, como para que no quepa duda alguna sobre el objetivo de alcanzar el poder del Estado a como dé lugar, o de supuestamente defenderlo, también a como dé lugar.

Es preciso, entonces, que la academia asimile, indague y comprenda la nueva racionalidad de esta guerra en sus dimensiones económicas y sociales, pero ante todo en la de la política. Más aún si se desea acertar en el análisis, y en particular en las propuestas de investigación que buscan orientar en el largo camino que hay que recorrer para recuperar el derecho de la sociedad a hacer uso de la política, es decir, a institucionalizar los conflictos y negociar los intereses.

En estas circunstancias, hay una obligación moral de profundizar en la investigación social que tiene que ver con la guerra que nos agobia; y también -como dirían los economistas- con sus externalidades. Pero es necesario ser en extremo cautos e ingeniosos en las formas de aproximación empírica. Es mucho menos riesgosa para los analistas sociales, pero sobre todo más útil y productiva, la investigación silenciosa y su adecuada difusión clarificadora y propositiva, que los escritos rápidos y las declaraciones en los medios de comunicación de masas, así se hagan con responsabilidad. Hay que idear formas de sustituir de manera parcial -ya que por su importancia en la sociología no puede abolirse, así sea de manera temporal- el trabajo de campo y remplazarlo con recursos alternativos. Pero ante todo debe aguzarse la capacidad especulativa en el sentido positivo del trabajo analítico. Es importante, además, incorporar en la investigación recomendaciones sobre políticas concretas factibles de implementar. Y también es necesario buscar la manera de construir comunidades académicas reales y activas, es decir, en permanente comunicación crítica, con el fin de multiplicar los esfuerzos de investigación y hacerse sentir en forma colectiva en los espacios centrales de formación ciudadana y en los que generan las decisiones políticas. Infortunadamente, y no obstante los avances en los trabajos que buscan explicar la confusa situación en que se halla el país, los centros de decisión y formulación de políticas en el Estado siguen mostrando con frecuencia improvisaciones, escasa capacidad y, lo que es más grave, ausencia de principios éticos.

Este contexto político y de la academia se hizo más visible el año pasado, debido en buena medida a la frustración de no haber podido contener la guerra

mediante el último proceso de paz. Su desprestigio contribuyó al arrollador triunfo del candidato presidencial que ofrecía mano firme contra la subversión. El gobierno inaugurado el pasado mes de agosto se enfrentó con decisión, aunque sin mucha claridad, a los problemas políticos, económicos y de seguridad del país. Pese a no observarse resultados contundentes en su programa bandera, la política de seguridad democrática, al comienzo del presente año el clima nacional reflejaba cierto optimismo, pues las guerrillas no habían mostrado signos de fortaleza desde su nada efectiva arremetida terrorista con que inauguraron el nuevo gobierno. Este clima de distensión estuvo reforzado con la seguridad derivada de los desplazamientos terrestres vacacionales de numerosas familias, mediante caravanas de vehículos escoltados por la Fuerza Pública.

Sobrevinieron entonces impactantes acciones terroristas que cambiaron el panorama de las percepciones: el *carro bomba* en un exclusivo club de Bogotá, con la población civil por primera vez como blanco único, y la *casa bomba* en un barrio popular de Neiva, en atentado contra autoridades de la Fiscalía y la Policía, que por lo exagerado de su dimensión arrasó un barrio popular. Otros hechos, entre los que se destaca el derribamiento en las selvas del sur del país de un avión estadounidense en misión de inteligencia, el asesinato posterior de dos de sus tripulantes, uno de ellos estadounidense, y la captura de otros tres de la misma nacionalidad, completaron las acciones que conmovieron al país en pocos días. El gobierno desató entonces una ofensiva diplomática en busca de condenas a las Farc, presuntas responsables de los hechos. El objetivo oficial es ampliar la aceptación discreta lograda por el gobierno anterior con respecto a la co-responsabilidad de la comunidad internacional en el problema de las drogas, sustento principal del conflicto armado. De ahí deberán derivarse -de acuerdo con ese pensamiento- apoyos activos de esa comunidad para la solución de la guerra. Pero el gobierno va aún más allá: busca la incorporación del conflicto armado interno a la guerra mundial contra el terrorismo y la consecuente ampliación de la ayuda militar de Estados Unidos al país. Su desmedido afán de logros llevó al gobierno nacional a manifestar su apoyo a la declaratoria unilateral de guerra de Estados Unidos a Irak, en contra de la vasta movilización mundial opuesta a esta decisión.

El meollo del problema del gobierno nacional parece radicar en la necesidad política de obtener resultados importantes en el menor tiempo posible, en especial en el complejo tema de la guerra interna. Para ello diseña y ejecuta sobre la marcha su política de seguridad democrática. La mayor dificultad en el afán de elaborar una política coherente y eficaz en ese campo es articular la realidad de la guerra con la búsqueda de paz. Un régimen político liberal con notorias falencias en su ejercicio democrático, provenientes de la prevalencia del clientelismo, la corrupción administrativa y la exclusión en el ejercicio de la ciudadanía, alterado por un conflicto armado interno en el que intervienen subversión y paramilitares, requiere confrontar ese conflicto sin deteriorar sus limitados logros en materia de derechos civiles. El objetivo de este requisito esencial es la creación de condiciones mínimas

para alcanzar una paz, que permita emprender los correctivos necesarios para desarrollar la democracia y de esta manera asegurar que esa paz sea duradera. Se hace necesario entonces rediseñar en buena parte la política de seguridad, con el fin inmediato de afrontar la guerra, con instrumentos jurídicos, económicos, sociales y militares que, sin mengua de su eficacia para frenar este conflicto, logre inducir un ambiente propicio para iniciar un proceso de paz que sea satisfactorio para las partes en pugna. Un logro así implica incorporar, de manera explícita y dinámica, el problema de la guerra al de la paz. Pero para que tal objetivo tenga viabilidad es indispensable la inclusión activa de la sociedad civil en esa tarea, mediante metas que consideren profundas políticas sociales de mediano y largo plazo.

El fin de la Guerra Fría abrió nuevos espacios para que los gobiernos tuvieran más en cuenta los aportes proporcionados por las ciencias sociales en un mundo cada vez más globalizado y requerido de perspectivas diversas. Se rompieron las exclusas de fuerzas y tendencias que estaban represadas por el equilibrio bipolar y se dio paso a fenómenos antes subvalorados o ignorados, además de que se redujeron las prevenciones políticas e ideológicas frente a muchas actividades sociales que hoy son percibidas como naturales. Pero el conflicto armado interno limitó esos logros en el país, pese a haberse visto experiencias ambivalentes en los últimos gobiernos.

En estas circunstancias, hay que buscar la manera de que los resultados de las investigaciones sociales sean tenidos en cuenta en el diseño de políticas que pretendan avanzar en la solución de los problemas más acuciantes del país, entre ellos los de la guerra y la paz. Esta tarea hace parte de la necesidad de inducir mayor legitimidad en el Estado, es decir, de que este despierte credibilidad y confianza, pero ante todo que provoque el respaldo de la sociedad mediante una mayor participación política. Que se convierta en la instancia natural a la que acudan los ciudadanos para la solución de sus conflictos. El Estado colombiano ha sido tradicionalmente débil en términos políticos. De ahí la permanente búsqueda de soluciones privadas -incluida la violencia- a los más variados problemas sociales.

La formulación de políticas eficaces para generar de manera sostenida soluciones a estos problemas, requiere del compromiso dinámico y persistente de amplios grupos sociales. Para provocar esos apoyos de manera fluída se necesita un Estado que cuente con una confianza generalizada en sus instituciones, que se vea una voluntad política real por parte de los gobernantes para reducir de manera significativa lastres tales como la corrupción y, sobre todo, que haya suficiente credibilidad en la Fuerza Pública para que produzca respaldos espontáneos. La reivindicación de los derechos humanos en años recientes por parte de la Fuerza Pública, debido en buena medida a la presión de la comunidad internacional, tiene como subproducto haber ganado el respeto de muchos sectores sociales. Pero los crímenes de paramilitares y guerrilleros han opacado el problema de violación de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, y por lo tanto han ayudado a diluir responsabilidades. Solamente un Estado legítimo puede implementar políticas

efectivas que tengan como meta obtener el apoyo social indispensable para enfrentar la guerra, recuperar la política y acceder a una paz sostenida. El Estado tiene la responsabilidad de inventar medios políticos para lograrlo, y no dedicarse en especial a competir en el campo militar con guerrillas y paramilitares. El uso de medios militares con tendencia a la exclusividad para enfrentar la guerra y reformas políticas sin la claridad suficiente para subsanar antiguos vicios en el ejercicio de la democracia, atentan contra la flexibilidad y el equilibrio necesarios para afrontar con éxito estos problemas. Y en estas arduas tareas, complicadas aún más por los afanes del momento, la academia tiene mucho que aportar, en especial para evitar que, entre otras cosas, sigamos después de cuarenta años con visiones recurrentes frente al conflicto armado, sus entronques políticos y sus implicaciones sociales.